ESTRATEGIAS POLÍTICAS DE LOS ACTORES COLECTIVOS INDÍGENA-CAMPESINOS EN CHIAPAS

Marco Estrada Saavedra
El Colegio de México

Introducción

La constitución de los actores colectivos indígena-campesinos independientes nacionales coincide y es producto de la crisis de los modelos económico y político, surgidos a finales de los años treinta del siglo XX, que habían conformado y orientado la industrialización, vía sustitución de importaciones, y el ordenamiento político de la sociedad a través de un sistema político presidencialista dominado por un partido de Estado hegemónico y corporativista.

Como Blanca Rubio bien nos recuerda, a finales de los años sesenta, la organización de la sociedad y producción rurales se caracterizaban por las dificultades de reproducción del modelo agropecuario imperante: pocainversión tecnológica en la producción, tasas bajas de producción, extracción de excedentes del campesinado por parte del capital comercial y usurero, retiro de subsidios públicos para la producción y comercialización, etcétera. A la par, el país vivía, entre 1960 y 1990, un proceso de cambio demográfico estructural: aumento de la población y de la urbanización, así como procesos de migración del campo a la ciudad, empobrecimiento del campesinado y descampesinización. Bajo estas condiciones, la capacidad del campo mexicano para satisfacer la demanda de productos agropecuarios de la población consumidora se vio seriamente mermada, por lo que se caracterizó por un constante déficit productivo. "De 1970 a 1982, mientras el PIB de la rama creció al 3.1%, la tasa demográfica se incrementó al 3.4% anual".[1] El déficit del mercado agropecuario nacional fue paliado, en parte, por las cada vez más importantes importaciones de productos del campo y, más tarde, por la apertura de gran parte del mercado agrícola a la competencia internacional de productores rurales subsidiados y protegidos de la competencia por sus gobiernos. Por tanto, la

1 Blanca Rubio (1996). "Las organizaciones independientes en México: semblanzas de las opciones campesinas ante el proyecto neoliberal", en Hubert De Gramont. *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, México, UNAM y Plaza y Valdés. pp. 117.

liberalización comercial y la globalización del campo colocaron al campesinado nacional en una situación en que se volvió "prescindible", por "improductivo", en el marco del nuevo modelo económico nacional.

Por supuesto, los actores rurales no se han mantenido pasivos ante lo que se antojaría un cataclismo de su mundo: sus respuestas a estos cambios estructurales van desde los intentos de sobrevivir en situaciones precarias manteniéndose en el campo, hasta la emigración a las ciudades y a los Estados Unidos de América, pasando por el abandono de su existencia campesina para integrarse a los estratos más bajos del proletariado industrial. Pero los campesinos también han buscado respuestas a través del desafío político organizado tanto para contrarrestar a las fuerzas políticas y económicas "responsables" de la crisis del campo, así como para adaptarse a las nuevas circunstancias conservando su independencia del corporativismo del partido oficial.

Por su parte, el sistema político que institucionalizó la Revolución de 1910 entró, a más tardar en 1968, en una profunda crisis de legitimidad. Tres décadas después, la acumulación de cambios institucionales y socioculturales en el sistema político, derivaron en la "democratización" de éste último. Así, en el año 2000 se logra la transición a la democracia cuyos signos más evidentes son la alternancia política en el gobierno federal; las cámaras de diputados y senadores se constituyen pluralmente y sin ninguna mayoría dominante; creciente independencia de los poderes legislativo y judicial, y, por lo tanto, un amplio acotamiento del poder ejecutivo; elecciones federales y estatales competitivas e imparciales, que se reflejan en la composición plural de los gobiernos estatales; un órgano electoral independiente; creciente transparencia en la administración pública; una opinión pública más crítica apoyada por medios de comunicación más libres y plurales; mayor interés y participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. En Chiapas, por ejemplo, una coalición opositora gana el gobierno estatal en el año 2000 con un congreso dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que la geografía política municipal se tornó plural. En el caso específico del municipio de Las Margaritas, en donde se ubica la región aquí estudiada, las Cañadas Tojolabales de la Selva Lacandona, por segunda vez consecutiva el gobierno municipal se halla en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una coalición de organizaciones sociales y campesinas. De hecho, las elecciones municipales de 2004 fueron ganadas por un candidato tojolabal de esta misma alianza.

Por supuesto, la calidad de la democratización del sistema político mexicano deja aún mucho que desear y obliga a su profundización; pero no se puede negar que ésta se encuentra en marcha y el país es, ahora, muy diferente, en términos políticos, al México en el que gobernó el PRI, durante setenta años, de manera indiscutible.

Este trabajo tiene el objetivo de analizar y comprender las estrategias políticas actuales de los actores colectivos indígena-campesinos independientes en la región tojolabal en Chiapas. En este sentido, haré una breve introducción a su

historia social y política con el fin de ubicar en su contexto la historia particular de cada uno de los actores estudiados, porque en ella se encuentran cifradas sus concepciones, formas de lucha y limitaciones actuales. En particular, me ocuparé, primero, de la Unión de Ejidos de la Selva (UES), después de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Organización de Pueblos Evangélicos Tojolabales (OPET) y, por último, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).[2]

Notas para la historia de los actores colectivos indígena-campesinos en Las Margaritas, Chiapas (1935-2006)

1. Los antecedentes

a) Fundación de Ejidos y colonización de la selva

En la región chiapaneca de Comitán y Las Margaritas (vid. mapa al final del texto), la historia política moderna de los tojolabales se inicia alrededor de 1933 con el proceso de desmantelamiento del sistema de fincas mediante el reparto agrario y la reconversión ganadera de los restos de las fincas agrícolas. La lucha por la formación de ejidos –primero a expensas de las fincas afectadas y después mediante la colonización de los terrenos nacionales de la Selva Lacandona– supuso para los tojolabales un proceso de aprendizaje colectivo de la gramática de la organización política. En efecto, en la construcción de sus nuevas comunidades campesinas, los tojolabales actuaron motivados por un anhelo de autonomía que exigía de ellos la cooperación voluntaria más allá del ámbito doméstico para afrontar los riesgos y costos de su empresa y disfrutar, asimismo, los beneficios de la formación, organización y gobierno de sus propios ejidos.[3]

Aunque la lucha por la dotación ejidal fue colectiva, rara vez hubo cooperación entre los campesinos de las diferentes colonias agrícolas para organizarse en contra de los finqueros y la burocracia de la reforma agraria. En realidad cada núcleo de solicitantes de tierras actuaba por su cuenta y consideraba a los demás como posibles competidores por un recurso escaso. De esta manera, la formación, primero, y el funcionamiento, después, de los ejidos tuvieron lugar en un contexto de *solidaridad restringida* entre los campesinos. Así, para los tojolabales, el ejido se convirtió en una pequeña república independiente.

---

2 No está de más apuntar que la información contenida en este escrito se basa, fundamentalmente, en resultados de trabajo de campo llevado a cabo entre 2003 y 2006.

3 Marco Estrada Saavedra (2003). "Für eine neue Welt, eine neue Gemienschaft. Die Erfahrung der Tojolabales bei der Urwaldkolonisierung in Chiapas". *Ethnoscripts*, Jahrgang 5, Heft 2, Institut für Ethnologie der Universität Hamburg: 34-52.

Fue dentro del marco legal de la Ley Agraria que las colonias agrícolas que se constituyeron a través de la dotación de tierras ensayaron estructuras sociales de autoridad, organización y representación que cohesionarían a las nuevas comunidades y definirían sus orientaciones colectivas de acción, ya que la desaparición del orden de dominación finquero dejó, para la población tojolabal ex acasillada, un "vacuum institucional"[4] que los campesinos solicitantes de tierras se vieron obligados a llenar para reordenar su vida social. De esta manera, la lucha por la obtención de tierras ejidales fue el principio generador de una rudimentaria organización social postfinquera, el *comité agrario mixto*, entre el grupo de los peticionarios y sus familias, que supuso la coordinación de actividades y responsabilidades, la movilización de su acervo de conocimientos y recursos materiales, así como la utilización de redes sociales familiares y vecinales, la generación de confianza mutua, solidaridad y la formación de una nueva identidad social, todo ello con el fin de enfrentar las dificultades, novedades e incertidumbres de la empresa que culminaría en una vida más allá del "baldío".

El ejido es una forma de organización de la vida social rural, que redefine la estructura de poder y autoridad de la comunidad. La "asamblea" es la depositaria de la autoridad y el poder comunitarios. Su "órgano ejecutivo" es el "comisariado ejidal". A través de la asamblea, "los ejidatarios organizan y ejercen control sobre los miembros individuales de la comunidad". En ella, los ejidatarios definen "en qué consiste el derecho de cada uno, así como las condiciones de membresía, coordinación de tareas y aplicación de sanciones". Su autoridad no sólo se extiende sobre cuestiones agrarias, sino, también, sobre todo tipo de asuntos colectivos y de interés general. Así, influye sobre los ejidatarios y el conjunto de miembros de la comunidad; por esta razón es "*de facto,* el gobierno local" de la comunidad.[5]

La participación en el proceso de deliberación y toma de decisiones en la asamblea se encuentra restringida sólo a los miembros de la comunidad (particularmente a los poseedores de derechos ejidales), pues, como los acuerdos son vinculantes universalmente, tienen efectos sobre el conjunto de la comunidad, los cuales serían potencialmente negativos si interviniese alguien extraño a la misma con un interés contrario al colectivo.[6] En este sentido, la organización ejidal funge como un ámbito de protección frente al mundo externo o como un bastión de la autonomía intracomunitaria. Efectivamente, en contrapartida al poder político municipal, del que han estado excluidos los indígenas hasta hace apenas algunos años, los tojolabales "ejercen un estricto control al interior de su comunidad".[7] De esta manera, las colonias agrarias son oasis de autonomía en donde se recrea el

---

4 Gemma Van der Haar (2001). *Gaining ground. Land reform ant the constitution of community in the Tojolabal Highlands of Chiapas, Mexico.* Amsterdam, Thala Latin America Series. p. 112.

5 Ibid. p. 133.

6 Ibid. p. 138.

7 Mario Humberto Ruz (editor) (1990). *Los legítimos hombres. Aproximación antropológica al grupo Tojolabal.* volumen I y II, México, UNAM. p. 191.

mundo y la vida social cotidiana local sin mayor interferencia e intromisión de extraños.[8] La autonomía hace referencia, entonces, a la (re)producción de la vida cotidiana en la que sólo los miembros de la comunidad discuten y dirimen conflictos comunitarios, riñas familiares y vecinales, incluyendo, también, la participación en la esfera religiosa, en las uniones ejidales, en programas gubernamentales o en proyectos de ONG's.

En fin, para los tojolabales eran evidentes los beneficios de la autonomía comunitaria interna que gozaban desde la fundación de sus ejidos; sin embargo, esa autonomía tenía un rostro problemático: el aislamiento del resto de la vida social tojolabal regional –exceptuando, por supuesto, las verbenas religiosas y el intercambio comercial en Comitán y Las Margaritas. En realidad, carecían de una conciencia de intereses sociales y políticos comunes, así como de los medios para solucionar problemas compartidos. Dejando sin contar la cooperación excepcional en los momentos de desastres naturales y de malas cosechas, el aislamiento de los ejidos era, en realidad, una auténtica indiferencia hacia la suerte de sus compañeros campesinos que vivían más allá de los límites de sus ejidos.

b) Buscando la liberación en la *Palabra de Dios*

Esta incomunicación interejidal empezó a desaparecer sólo hasta la aparición de los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal en las postrimerías de la segunda mitad de la década de los sesenta.

Justo en el período "liberacionista" de la diócesis (entre 1969-1999) en el mundo indígena-campesino, se configura una "catequesis de la encarnación" bajo la concepción de la teología de la liberación. Toda la vida de la comunidad social, económica, política y cultural se revela como el "lugar teológico" por excelencia. Los catequistas indígenas se vuelcan a la participación activa y crítica y se convierten "en portavoces de la reflexión de la comunidad... La palabra de Dios se va reflexionando en el seno de las comunidades a partir de los acontecimientos y situaciones vivenciales y son los catequistas los 'recolectores de la cosecha del pensamiento comunitario'".[9] De tal suerte, las comunidades indígenas reaniman su vida colectiva a través de las ceremonias religiosas y la reflexión bíblica. Bajo la luz del Evangelio, se descubren como personas con "dignidad" por ser "hijos de Dios", portadoras de derechos exigibles y con una cultura particular valiosa. En otros términos, las comunidades comienzan a reconocerse como un actor colectivo con la capacidad de influir en su propio destino.

---

8 Por supuesto, la autonomía de la vida social cotidiana tojolabal es "relativa", porque existe una relación "asimétrica" entre los indígenas y el Estado, que está mediada y dominada por la organización política y legal del municipio y el ejido.

9 Pablo Iribarren Pascal (2003). *Experiencia: 'Proceso de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Chiapas. México'*. San Cristóbal de las Casas, Ediciones Piratas. p. 56.

A través de la intensa labor colectiva catequística, se empezó a construir entre las comunidades tojolabales una *civitas christi*, que implicaba la transformación radical de la vida individual y colectiva. La "salvación" del alma colectiva comunitaria no tenía que esperar el "juicio final", pues podía materializar el "Reino de Dios", "aquí y ahora". Para los auténticos cristianos, resucitados en la fe, la tierra colonizada que habían habitado fue reconocida y resignificada como la "tierra prometida" en la que realizarían su tan anhelada "liberación". Así, la *civitas christi* suponía una reestructuración profunda de la vida social: por un lado, se inicia un proceso de recuperación, reevaluación y "reinvención" positiva de lo "tojolabal"; por el otro, se requería, al unísono, que las necesidades espirituales y materiales de la comunidad fuesen satisfechas. En este sentido, se configura un proceso de concientización y de (re)formación de una identidad colectiva, así como de organización mediante la cual se asumiera de modo colectivo la solución de problemas que los aquejaban desde la fundación de las colonias y ejidos. El eje articulador de los dos momentos sería la revitalización y resignificación de la "fe" católica teñida con tintes liberacionistas. Las comunidades tojolabales empezaban a encontrar su "propia voz" entre los acordes de la melodía de la teología de la liberación. Así, organizaron sus propias cooperativas de producción y consumo, entre otras, para asumir, de manera autónoma y ante el desinterés y la corrupción gubernamentales, la responsabilidad por su propia suerte.[10]

Pero los cambios en la estructura y organización de la comunidad no sólo se dan internamente, pues la labor pastoral también produjo una redefinición de las relaciones intercomunitarias en las Cañadas Tojolabales. Con su trabajo, los equipos de pastoral y los catequistas tenderían una red que comunicaría y vincularía a las distintas comunidades de la región entre sí y a éstas con la estructura diocesana. De manera semejante a sus contrapartes en otras zonas pastorales, la Misión de Guadalupe y La Castalia –las dos escuelas de formación de catequistas en el sureste de la diócesis– se convertirían en centros de intercambio de información, experiencias, ideas, proyectos y recursos, que a la larga permitiría no sólo estrechar lazos entre los diferentes grupos pastorales sino, sobre todo, promover toda la organización pastoral en equipo de manera más institucionalizada y funcional. Además, la vinculación inter-pastoral resultó, a la larga, en un enlazamiento de las comunidades indígenas, tanto en las zonas de colonización como con el resto de las regiones indígenas del estado. Las escuelas de catequistas no eran, únicamente, centros de formación espiritual sino también en oficios, así como de concientización política, como se manifiesta en el siguiente testimonio. "En los cursos en La Castalia aprendimos distintas cosas como estudiar la Biblia, los primeros auxilios, la carpintería, la mecánica, la sastrería, las matemáticas y, también, la

10 Sobre el tema, consúltese Marco Estrada Saavedra (2004). "Construyendo el reino de Dios en la tierra: pastoral y catequesis en las Cañadas Tojolabales de la Selva Lacandona (1960-1980)". *Sociológica*, UAM-A, año 19, número 55: 199-242.

ley agraria; [aprendimos] cómo formar uniones ejidales, hacer una cooperativa, organizar el trabajo colectivo, gestionar escuelas o caminos y resolver problemas comunitarios" (entrevista con Caralampio Cruz, catequista y líder de Tierra y Libertad, 29 de diciembre de 2004). De tal suerte, el trabajo de los catequistas en sus respectivas comunidades creaba nuevos fundamentos de integración y solidaridad sociales, así como la toma de conciencia de las realidades y problemas comunes compartidos.

c) Del Reino de Dios al de la política

Gracias a este proceso de ilustración y crítica colectivos, los catequistas empezaron a observar que la "palabra de Dios" por sí sola era insuficiente para superar los graves problemas cotidianos que aquejaban a las comunidades. La organización de la *civitas christi* había permitido estrechar los lazos intracomunitarios y fomentar entre sus miembros la creencia de que, como hijos de Dios, eran personas dignas y libres que merecían gozar y ejercer sus derechos. "Pero ¿cómo hacerlo?", se preguntaban los catequistas cuando la vida nueva suponía abandonar la enfermedad, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la incomunicación y la injusticia en las que existían. Por eso, inspirados en su particular exégesis de la Biblia, buscaron respuestas en fuentes profanas para que la salvación de sus "almas" acompañara la de sus "cuerpos". Sus pesquisas los condujeron a partidos políticos de oposición, activistas de la izquierda social y hasta a los mecanismos corporativos del partido oficial. Fue gracias al segundo de estos grupos, que los catequistas comprendieron que su "liberación" dependía de su propia voluntad y organización. De esta forma, mientras que su vocación de servicio la descubrieron con plena conciencia en la catequesis, sin embargo su compromiso sólo adquirió un rostro más terrenal y práctico gracias a la orientación organizativa y política de los "asesores" y "brigadistas", es decir, de los grupos de activistas políticos de la izquierda social que pensaban que la "revolución" sólo era posible concientizando y organizando directamente a las "masas". Estos activistas vieron en los colonizadores tojolabales de la selva el potencial revolucionario del "pueblo" campesino –un pueblo que no sólo ya había adquirido por sí mismo una forma rudimentaria de organización social a través de la fundación de colonias y ejidos sino que, además, gozaba de identidad y solidaridad sociales que facilitaban, en cierta medida, la cooperación para las tareas colectivas que implicaba la construcción y funcionamiento de organizaciones campesinas. Por su parte, los tojolabales veían en los asesores y activistas políticos agentes comprometidos que los apoyaban en su "liberación".

De tal suerte, la *comunidad republicana de masas* se configuró en las Cañadas Tojolabales cuando, primero, se extendieron y formalizaron regionalmente las prácticas de convivencia y solidaridad típicas de la *civitas christi*, y, segundo, el sentido de las relaciones interejidales ya no se estructuró y orientó, de manera primordial, de acuerdo al ideal de la salvación colectiva intramundana mediante una

reforma radical de la vida cotidiana comunitaria, sino en razón de la construcción de un "poder popular" autogestivo a través de la consecución, organizada colectivamente, de proyectos sociales y agropecuarios. En otras palabras, la comunidad republicana de masas politizó la *civitas christi* haciendo real la liberación del alma colectiva a través del cuidado y bienestar del cuerpo de las masas. Esta transformación se fundamentó en el aumento de la participación de los miembros de las comunidades ejidales en los asuntos y tareas colectivos, con lo que se aprendieron y desarrollaron capacidades de entendimiento y cooperación interejidales a través de la negociación de intereses comunes. Así, la *tierra prometida* de las Cañadas Tojolabales fue transformada por las organizaciones campesinas en el territorio de la confederación de las repúblicas elementales ejidales.[11]

De la Iglesia, los campesinos habían aprendido que tenían derechos, pero desconocían, en realidad, cómo hacerlos efectivos y qué se podía lograr con ellos. Los candentes debates del Congreso Indígena de 1974 en San Cristóbal de las Casas les ofrecieron una idea concreta y práctica del significado y contenido de esos derechos: salud, educación, comercio y producción. Dado que la preparación y organización material del Congreso había sido responsabilidad de los activistas políticos por encargo expreso del obispo de San Cristóbal, no fue entonces casualidad que los primeros proyectos de las organizaciones campesinas que se formaron después en la región asumieran estas demandas en su lucha.[12]

De origen universitario, principalmente de centros de estudios superiores como la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de México, y con experiencia en la actividad política izquierdista, los asesores y brigadistas de las organizaciones campesinas operaban como ideólogos, promotores de proyectos productivos y sociales y consultores especializados. En tanto ideólogos, ofrecían a las organizaciones y comunidades campesinas un proyecto político que consistía en la formación de un poder popular autogestivo, algo muy parecido, creerían los tojolabales, al "anhelo de autonomía" de los indígenas liberados de la finca. Éste era el principio ideológico que orientaba, justificaba y jerarquizaba todo plan de acción posterior. Como promotores, los asesores proponían a los indígenas la realización de proyectos sociales (creación de escuelas o centros de salud) y productivos (comercialización de café, créditos

---

11 Sobre el tema ver Marco Estrada Saavedra (2005). "Republicanismo en la Selva Lacandona: historia de la constitución de las organizaciones campesinas en las Cañadas Tojolabales (1975-1990)". *Estudios Sociológicos*, vol. XXIII, núm. 69, septiembre-diciembre: 767-806.

12 Sobre el Congreso Indígena de 1974, consúltese Juan González Esponda (2001), *Movimiento campesino chiapaneco 1974-1984*, tesis de licenciatura en economía, UNACH, San Cristóbal de las Casas; Antonio García de León (2002), *Fronteras interiores. Chiapas: una modernidad particular*, Océano, México, (en particular las páginas 166-177), así como: Francis Mestries (1990), "Testimonios del Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas. Octubre de 1974", en Julio Moguel (coordinador del tomo), *Historia de la cuestión agraria mexicana. Los tiempos de la crisis 1970-1982*, tomo 9, segunda parte. México, Siglo XXI y CEHAM. Este último texto es rico en testimonios de los participantes indígenas en el evento.

para la explotación ganadera). Por último, como consultores especializados los asesores ofrecían su conocimiento experto a las organizaciones en materias como agronomía, asesoría legal, negociación política, relaciones públicas o manejo de instrumentos financieros. Además de las tres funciones que cumplían para las organizaciones campesinas, los asesores ponían a disposición de éstas un rico abanico de contactos con instituciones públicas (universidades), ONG's, así como con funcionarios públicos, que los conectaban a una red de cooperación que podía facilitar la consecución de sus objetivos.

Para los asesores y activistas sociales de tendencia ideológica maoísta que cooperaron decisivamente para construir las organizaciones campesinas en las Cañadas Tojolabales, en particular, y en la Selva Lacandona, en general, el objetivo de su quehacer político directo con las "masas" populares consistía en "crear un vínculo entre organizaciones campesinas, sindicatos y grupos populares [para formar] un gran movimiento de masas [con el fin de] democratizar el país tomando el poder por la vía legal". Ciertamente, no descartaban de antemano la vía armada, sin embargo a diferencia de la Liga 23 de Septiembre y sus estrategias de guerrilla urbana o de Lucio Cabañas y su guerrilla rural, por ejemplo, los maoístas pensaban que la opción por el recurso de las armas "no tenía que ser una decisión nuestra, sino, en última instancia, una decisión de las masas" (entrevista con René Gómez, ex asesor de la ARIC-Unión de Uniones y de la Unión de Ejidos de la Selva, 11 de agosto de 2003). Al respecto abunda Tere García, ex asesora de Tierra y Libertad: "La Unión del Pueblo era una organización clandestina con un planteamiento revolucionario para tomar el poder a través de generar bases sociales de apoyo. La idea era que la gente se apropiara de las formas de organización a través de la 'concientización de las masas' en un proceso lento que llamábamos 'guerra popular prolongada'. Pensábamos que el trabajo político se tenía que hacer en el campo por las particularidades de México, pues era imposible seguir el marxismo-leninismo en la cuestión de que eran los obreros los que tenían que constituirse como la vanguardia revolucionaria. Creíamos que teníamos que llevar la lucha popular prolongada de la periferia al centro, del campo a la ciudad. Nuestros esfuerzos se encaminaron a Chiapas, porque el Comité Central vio que en el sureste del país había mucho mejores condiciones para crear esas bases sociales, ya que existían condiciones geográficas, de marginación, grupos con mucha sensibilidad y, una cosa importante que no veíamos claro entonces pero que ahora explica muchas cosas, no había Estado. Para ganar [la] confianza [de los campesinos], los activistas de la Unión del Pueblo llegábamos con la gente a trabajar buscando estar inmersos en sus problemas y ayudando a resolverlos" (entrevista con Tere García, ex asesora de Tierra y Libertad, 21 de octubre de 2004).

Los activistas políticos sabían, de antemano, que el trabajo de concientización y organización de las masas no era fácil, pues pretendían trascender la "cultura caciquil" de las organizaciones populares: "Lo que queríamos era una organización definitivamente democrática, donde las decisiones se tomaran por la mayoría"

(entrevista con René Gómez, ex asesor de la ARIC-Unión de Uniones y de la Unión de Ejidos de la Selva 11 de agosto de 2003). De tal suerte, se modificaría la cultura y actitud pasiva imperante en las comunidades con el fin de fomentar, mediante mayor transparencia y fiscalización en el ejercicio del poder, la participación más activa en los asuntos concernientes a todos.

La Unión de Ejidos de la Selva

La creación de la Unión de Ejidos de la Selva, en 1980, es producto de este intenso proceso de politización de los tojolabales. El proyecto original de La Selva, como también se conoce a esta organización, contemplaba tres metas fundamentales: "tierra, camino y café", como dicen los mismos campesinos. La satisfacción de estos objetivos era el "pretexto" para organizar y concienciar políticamente a las masas campesinas, como pensaban los activistas políticos maoístas, y, de este modo, crear un poder popular autogestivo de "las masas para las masas" como fundamento de la revolución socialista. Sin embargo, los problemas cotidianos y concretos en torno a la producción y comercialización de café fueron desplazando los más abstractos y lejanos como los de la formación de un poder popular dentro del horizonte de la lucha de la UES.[13]

En el contexto de un sistema político autoritario y excluyente, los objetivos políticos iniciales de la UES –al menos tal y como los entendían sus primeros asesores maoístas (la organización autogestiva de las "masas" para preparar la revolución)– dan cuenta de un proyecto "antisistémico" que, entre otras cosas, implicó la renuncia a la lucha electoral y a las alianzas con partidos políticos, aunque fuesen de oposición, por temor a que sus dirigencias y burocracias los cooptaran. En efecto, La Selva se constituye en un momento histórico en el que los campesinos buscaban, por un lado, vías alternativas de organización a las que ofrecía el corporativismo oficialista de la Confederación Nacional Campesina; y aprovechaban, por el otro, las políticas agrarias posteriores a la administración del gobierno de Luis Echeverría que promovían la producción y comercialización. De esta forma, anhelaban construir, sobre todo, organizaciones independientes, democráticas, representativas de sus intereses y eficientes productiva y comercialmente, cuya escala las pudiera hacer manejables y controlables por sus miembros, evitando así reproducir los viejos vicios de una dirigencia privilegiada y autoritaria y una base social sumisa. Asimismo a la par de que desarrollaban capacidades para proponer alternativas viables de desarrollo rural, estas organizaciones mantenían una relación crítica y fiscalizadora con los organismos gubernamentales destinados al fomento de las actividades agropecuarias.

---

13 Para una historia comprensiva de la Unión de Ejidos de la Selva, véase mi trabajo (2006): "Entre utopía y realidad: historia de la Unión de Ejidos de la Selva", en *Liminar. Estudios sociales y humanísticos*, año 4, vol. IV, num. 1, CESMECA, UNICACH, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. pp. 112-135.

Ahora bien, a pesar de su objetivo de crear un poder popular autogestivo "de las masas para las masas" que contribuyera a generar las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución, la UES no desplegó, empero, su lucha política de manera confrontativa, como sí lo harían, por ejemplo, la CIOAC o la Organización Campesina Emiliano Zapata en Chiapas, cuya disidencia combativa las expuso a los embates represivos del gobierno, que incluyeron persecuciones, encarcelamientos, intimidaciones y asesinatos de algunos de sus líderes y miembros de sus bases sociales. En este mismo clima de violencia, las organizaciones campesinas de origen maoísta, como la UES o la *Quiptic Ta Lecubtesel* (en tzeltal, Unamos nuestras fuerzas para progresar), optaron, en cambio, por estrategias de lucha que aprovechaban las divisiones al interior del aparato estatal, para lograr el apoyo de grupos reformistas simpatizantes con las luchas populares mediante negociaciones y, así, conseguir sus objetivos de movilización sin exponer a sus bases y dirigencias a la represión gubernamental. El inconveniente mayor de esta estrategia ha sido, sin embargo, la cooptación de sus líderes, como eventualmente sucedería, por ejemplo en 1994, con el presidente de la maoísta Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones, Lázaro Hernández.

En efecto, aprovechando el giro de las políticas públicas, en el sexenio presidencial de José López Portillo (1976-1982), en apoyo a la producción rural, la UES se especializó en la producción del café, buscando siempre mantener su autonomía frente al brazo campesino corporativo del PRI y los organismos gubernamentales para el apoyo al campo, como el Banco Rural (BANRURAL) o el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE). Ante la corrupción y falta de apoyo reales de los organismo gubernamentales dedicados al fomento de la producción y comercialización campesinas, La Selva decide incursionar, hacia finales de los años ochenta, en el circuito del comercio justo internacional para multiplicar sus opciones comerciales en un mercado nacional e internacional inestable. Esto implicó, por supuesto, nuevos retos para los socios de La Selva, la cual, lentamente, iba orientando sus decisiones y acciones de acuerdo a los imperativos del mercado. Así, a la larga y después de diferentes experiencias de frustración, La Selva se había liberado del corsé ideológico anticapitalista de sus inicios maoístas y estaba incursionando en el terreno de la competencia mercantil a nivel internacional como una empresa social de pequeños productores de café. No obstante, los aspectos sociales del proyecto de la unión no se olvidaron. De hecho, su situación más estable en el mercado permitió atender necesidades y demandas sociales de sus socios. De tal forma, se fomentaron programas para mejorar y diversificar la producción de cultivos de autoconsumo, la gestión de construcción de viviendas, la ampliación de los servicios de salud y educación y también la construcción de infraestructura y equipamiento comunitario.

La formación del EZLN y el levantamiento insurgente de 1994 sometieron a La Selva a una crisis política. En 1994 casi la mitad de las comunidades asociadas a La Selva abandonaron la organización y se incorporaron al zapatismo. Después

de tensiones y negociaciones, el EZLN y La Selva lograron acordar un respeto mutuo hacia sus organizaciones, formas de lucha y objetivos.

Entre 1996 y 2003, la UES se enfrentó a otra crisis, pero esta vez de origen administrativo debido a un fraude de su despacho contable y algunos de sus dirigentes, que casi derivó en su desaparición. No fue sino hasta el 2004 que la UES pudo recuperarse y continuar su participación en el mercado justo internacional, si bien ello tras haber perdido a una parte de sus socios y base social por dicho motivo.

En retrospectiva, en el contexto de la crisis económica de 1982 y de la introducción sistemática posterior del modelo neoliberal en la economía y el Estado, la UES reconoce dos cuestiones: 1) las dificultades para el éxito de la lucha revolucionaria por el socialismo y 2) las consecuencias destructivas del mundo y economía campesinas que traía consigo la liberación e internacionalización del mercado agropecuario. Por tanto, optó por proponer un paradójico proyecto anti-neoliberal basado en el reconocimiento de la importancia de la economía campesina para un proyecto nacional democrático-popular a través de la integración del campesinado a las nuevas realidades del mercado como empresarios orientados a la producción y comercialización competitivas y eficientes sin olvidar el desarrollo social de sus asociados, comunidades y regiones. Este estrategia política ha resultado dificultosa en un entorno político y económico complejo: por un lado, está el desmantelamiento paulatino de las instituciones y los recursos públicos orientados al fomento de este tipo de empresas sociales; por el otro, se encuentran la intensa competencia en el mercado global, la falta de crédito, la inestabilidad del mercado internacional del café, así como la dificultad para acceder a tecnología moderna, etcétera.

Veinticinco años después de su fundación, es decir, en un contexto institucional caracterizado, en mayor o menor grado, por la instauración de una democracia representativa, la UES ha perdido *importancia política* en la región, justamente por la misma causa que la hizo, en su momento, políticamente independiente y económicamente exitosa: el rechazo a entablar relaciones con partidos políticos y permitir que sus líderes fueran postulados como candidatos de elección popular. Al parecer, las formas anteriores para salvaguardar su independencia política no son las más adecuadas para las condiciones políticas que hoy existen.

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos

La CIOAC se constituye en 1964 como el brazo campesino del Partido Comunista Mexicano (PCM).[14] Aunque su relación con el partido fue cercana y de alianza, lo que incluyó la formación de muchos de sus cuadros de dirigentes por los comunis-

14 Todavía no contamos con una historia nacional y estatal de la CIOAC. Sobre algunos aspectos de su historia nacional, se puede consultar Blanca Rubio (*op. cit*), en particular pp. 121-123. Para el caso de Chiapas, sólo tenemos fragmentos de su historia en algunas regiones del estado. Véase al respecto Angélica Montellano García (2001), *Organizaciones campesinas y corporativismo estatal: la ARIC y la CIOAC en Chiapas*, tesis de maestría en estudios latinoamericanos, UAM.

tas, sin embargo la CIOAC mantuvo en todo momento su independencia orgánica de éste. La misma situación se repetiría, más tarde, en la relación que entablarían con el Partido Socialista Único de México (PSUM), el Partido Mexicano Socialista (PMS) y, hoy día, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De cualquier forma, entre la CIOAC y el partido de izquierda en turno con el que estuviera aliado había una suerte de división del trabajo: el partido se dedicaba a la política, la organización electoral y la formación de cuadros, y la CIOAC se concentraba en los problemas agrarios y la organización y movilización campesina. Más tarde, cuando se alcanzan diputaciones y presidencia municipales (sobre todo con el PRD), la capacidad de gestión del partido se vuelve fundamental para dar respuesta a las demandas materiales de las bases sociales de la CIOAC. Así, la organización campesina se movía en dos frentes de lucha: la movilización contestataria y la toma de poder a través de las elecciones con el fin de facilitar las gestorías a favor de sus socios.

La concepción política de los ideólogos nacionales de la CIOAC consistía en un proyecto de cambio de sistema social hacia el socialismo, aunque, como en el caso de la UES, no por la vía armada. En cambio en el nivel local la lucha política perseguía, principalmente, la sindicalización de los obreros agrícolas y su organización política, así como la dotación de tierras para sus agremiados y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina a través de programas de desarrollo familiar y comunitario regionales (servicios públicos de infraestructura y de producción y comercialización agropecuaria). A parte de la gestión legal para resolver y satisfacer sus demandas, los métodos de lucha incluían movilizaciones de protesta, ocupaciones de edificios públicos e invasiones de tierra. A estas formas de lucha, los gobiernos estatal y municipal reaccionaban con represión, persecución, cárcel y asesinatos en contra de líderes y bases sociales de la CIOAC.

Antes de llegar a la región Comitán-Las Margaritas, la CIOAC ya tenía presencia política y organizativa, alrededor de 1973, en Simojovel, Huitiupán, Venustiano Carranza, Villas las Flores y Oventic. Así, entre 1975 y 1976, miembros de la CIOAC y del PCM hacen presencia en la región Comitán-Las Margaritas, con lo cual los nuevos cuadros locales de la organización asesoran y acompañan a grupos de campesinos solicitantes de tierra. Pero, debido a que su fuerza aún era minúscula, los líderes y activistas de la CIOAC y el PCM se aliaron y apoyaron las luchas sociales y campesinas de los maoístas en la Cañada Tojolabal, en especial de la Unión Ejidal Lucha Campesina (UELC).

Por cuestiones ideológicas, electorales y hegemónicas, hay una ruptura entre CIOAC y los maoístas en 1982. La crisis se agudiza con la formación del Consejo Supremo Tojolabal.[15] Una fracción maoísta se une a la oficialista Confederación

15 Sobre el tema, consúltese Chirino Palacios, Patricia y Joaquín Flores Félix (1991). *Buscando espacios: el Frente Independiente de Pueblos Indios*, Cuadernos INI. Monografías de organizaciones

Nacional Campesina y al PRI. La CIOAC postula, en cambio, un candidato tojolabal apoyado por el PCM. Después se fractura la UELC y una parte se hace priísta y la otra cioaquera. Nace la Unión de Pueblos Tojolabales. Todo ello resulta en un crecimiento de la CIOAC entre la población campesina de la región.

A diferencia de la UES, la CIOAC decide incorporarse al EZLN tanto en sus bases de apoyo como en su dirigencia política, pues compartía con los rebeldes el sentido y las demandas de su lucha. En efecto, los "cioaqueros" pensaron, entonces, que era el tiempo de la revolución y que había posibilidades de triunfar. Sin embargo, tras el fracaso del levantamiento y el avance guerrillero y en vista a los espacios de negociación que los gobiernos federales y estatales abrieron para las organizaciones campesinas independientes y no-zapatistas, empezaron a perfilarse diferencias entre el EZLN y la CIOAC. Básicamente éstos últimos percibieron una pérdida de independencia y una creciente subordinación autoritaria al EZLN, por lo que, más tarde, se deslinda de la lucha armada justo en el contexto en que puede negociar con los gobiernos federales y estatales el reconocimiento y regularización de los predios invadidos o recuperados durante y después del alzamiento insurgente de 1994. Tras la ruptura con el EZLN, la CIOAC sufre, no obstante, una escisión en 1997: una parte de sus dirigentes y de sus bases se mantiene solidaria con el zapatismo y forman la CIOAC-Independiente. Así surgen conflictos entre ésta y la "CIOAC oficial" en torno a las simpatías de los asociados y los recursos económicos, bienes muebles e inmuebles con los que contaba la organización.

Después de su interludio revolucionario, la CIOAC continúa su lucha político-electoral por el poder municipal en un contexto de apertura del sistema político, aprovechando el debilitamiento del PRI y la desconfianza de las uniones ejidales maoístas hacia la lucha partidista. Así, los triunfos electorales de las presidencias municipales han permitido a la CIOAC, en alianza con el PRD, ofrecer alternativas de desarrollo comunitario a sus miembros a través de la representación político-institucional y la gestión de recursos y programas públicos.

En un contexto institucional de apertura democrática, la CIOAC ha sabido adaptarse y aprovechar la nueva situación porque, a diferencia de la UES o del EZLN, estaba políticamente preparada para ello gracias a su amplia experiencia de alianzas partidistas y participación en comicios, volviéndose así una aliada del gobierno estatal (2000-2006) y asumiendo, en diferentes municipios, incluyendo el de Las Margaritas desde hace cinco años, el rol de gobierno municipal.

En efecto, desde las instituciones de representación popular, la CIOAC ha sabido introducir sus intereses obteniendo resultados satisfactorios y mayor fuerza política en la región y en el Estado. Ello ha redituado no sólo en gestiones efectivas de programas y recursos públicos para sus asociados, sino, también, en el reconocimiento político de su organización y en la disminución de la persecución y represión de sus líderes y bases. Se ha vuelto, pues, una referencia

---

indígenas III, IIS-UNAM, México.

fundamental para las luchas sociales y políticas de los tojolabales. Además, ha mantenido su independencia del partido, como lo hizo en el pasado, porque el PRD en la región, en particular, y en el estado, en general, carece de cuadros y bases sociales propios, lo que ha contribuido a que la burocracia partidista no someta y corporativice al movimiento campesino cioaquero, como ha sucedido en otros contextos donde la alianza partido-movimiento ha sido a costa de la subordinación y hasta desarticulación del movimiento social –por ejemplo el urbano popular en la Ciudad de México.

La Organización de Pueblos Evangélicos Tojolabales

La Organización de Pueblos Evangélicos Tojolabales se funda en 1999 como respuesta a las persecuciones, expulsiones y asesinatos por motivos religiosos que habían padecido los tojolabales evangélicos en manos de los católicos en los últimos años. En la región tojolabal el conflicto entre evangélicos y católicos es explicable por la concepción predominante de la comunidad que se tiene en los ejidos. En efecto, simbólicamente la comunidad es concebida como una unidad de vida en la que impera el "acuerdo" para mantener la cohesión y solidaridad comunitarias tanto como mecanismos de regulación de la convivencia interna como de defensa y autonomía frente a intervenciones externas en la vida comunitaria. En muchas comunidades católicas, uno de los contenidos del "acuerdo" prescribe la homogeneidad religiosa como un principio generador de cohesión social. Para aquellos que están en contra de la pluralidad política o confesional, toda división comunitaria trae consigo el socavamiento de la legitimidad del conjunto de autoridades de la comunidad y, en consecuencia, produce intereses particulares y facciosos en los portadores de roles de mando.

A diferencia de los tojolabales católicos que gozaban con una amplia experiencia de fundación y organización de uniones ejidales independientes en la región, los evangélicos sólo tenían en su haber, si acaso, su participación en grupos corporativos del Partido Revolucionario Institucional. Si bien no rechazaban la política en su conjunto, pues asumían su responsabilidad ciudadana en el marco de las instituciones y los canales políticos establecidos, los evangélicos guardaban, en cambio, cierto recelo a toda práctica política cuyas orientaciones colectivas de acción implicaran la confrontación contestataria hacia el gobierno y otros actores sociales. Por tanto, la propuesta de fundar una organización independiente, como la OPET, fue rechazada por la mayoría de los creyentes evangélicos. De hecho, la misma propuesta, que surgió, en particular, de un pequeño grupo de pastores evangélicos de la Iglesia Presbiteriana Nacional preocupados por la violación sistemática de los derechos religiosos de los miembros de su feligresía, fue rechazada por la misma institución eclesial, que quería evitar la politización de la religión y, por tanto, todo tipo de conflicto con los católicos y el gobierno. Debido a la incomprensión en torno al proyecto de la defensa de los "derechos humanos", las

tensiones dentro de esta iglesia llegaron a tal grado que se generó un cisma que derivó en la creación en 1999, por parte de los disidentes y un número reducido de creyentes (alrededor de 600), de la Iglesia Presbiteriana Renovada.[16]

Desde su fundación, la OPET ha luchado contra la intolerancia religiosa y la indiferencia y/o permisividad de las autoridades municipales y estatales hacia estos delitos. Después de entablar una alianza con el PRD y la CIOAC, [17] en el verano de 2000, la OPET amplió el abanico de sus objetivos organizativos incluyendo, así, la promoción del desarrollo comunitario a través de la gestoría en las instancias públicas de programas productivos, agropecuarios, educativos, de salud, vivienda y transporte.

A pesar de su corta historia, la OPET ha tenido un crecimiento espectacular en la membresía de asociados: de 600 a 2500 entre 1999 y 2004, y con presencia en 12 comunidades en 1999 a 18 en 2004. Esto se explica en el contexto de apertura del sistema político chiapaneco y de las alianzas político-electorales en las que oportunamente participa con el PRD y la CIOAC. En efecto, si en un principio la OPET se organiza en torno a la defensa de los derechos humanos de los tojolabales evangélicos, muy pronto amplía el abanico de sus intereses y comienza a promover la gestión de proyectos de desarrollo económico y comunitario (programas productivos, agropecuarios, educativos, de salud, vivienda y transporte), lo cual le ha redundado en una mayor afiliación de evangélicos y en una disminución de los conflictos por motivos religiosos.

A diferencia de los objetivos revolucionarios originales de los otros actores colectivos aquí analizados, el objetivo inicial de la OPET ha sido la defensa de los "derechos humanos". Y lo sorprendente es que su oponente no es en primer lugar, como en el caso de otras organizaciones campesinas, el gobierno o los "ricos terratenientes", sino los católicos tojolabales *religiosamente* intolerantes en sus propias

---

16 Desde la perspectiva de la feligresía de la naciente Iglesia Presbiteriana Renovada y de las también bases sociales de la OPET, el cisma tenía otras dimensiones. En efecto, para éstas la cuestión no era sólo un conflicto en torno a la politización de la religión, sino que, además, estaban en juego otros factores más materiales y prácticos para abandonar la Iglesia Nacional Presbiteriana y apoyar el proyecto de la organización política evangélica. Así, los pastores presbiterianos, sobre todo los mestizos, estaban en contra de la formación de la OPET, pues temían que el conflicto político se reflejara en divisiones en las congregaciones y en la pérdida de creyentes en la iglesia; lo cual, además, les afectaría personalmente en términos pecuniarios, ya que un menor número de congregaciones implicaba, en consecuencia, menores ingresos. Por su parte, los miembros de las congregaciones presbiterianas resentían cada vez en mayor grado el tener que sostener financieramente a sus pastores, por lo que la escisión de la iglesia fue una buena oportunidad de ahorrarse los costos del trabajo pastoral mestizo, sabiendo que tenían el apoyo de algunos pastores y "predicadores" tojolabales que se ocuparían, en cooperación con el resto de la congregación, de la vida religiosa de los creyentes.

17 En el marco de la alianza electoral estratégica para asegurar el triunfo del PRD en el municipio de Las Margaritas en las elecciones locales de 2001 y ante la importancia creciente del electorado evangélico en la región, la OPET y la CIOAC acordaron, a través de la mediación del PRD, frenar las expulsiones por motivos religiosos, evitando así que su dirigencia tolere amenazas y agresiones o proteja a los responsables por ser miembros de la organización. Esta alianza ha sido fundamental para la disminución de la intolerancia religiosa, porque las bases sociales de la CIOAC son, fundamentalmente, católicas.

comunidades que no sólo no respetan la libertad de creencia, sino que persiguen con violencia a los "herejes evangélicos". Aún más, el proyecto de la OPET gira en torno a la exigencia del cumplimiento del Estado de derecho que apunta más a la democratización institucional, que a su superación revolucionaria. Lo anterior se explica principalmente por dos cuestiones: la situación histórica del surgimiento de esta organización y la concepción política de los evangélicos influida por sus creencias religiosas. En efecto, a diferencia del sistema político autoritario en el que se forman los otros actores colectivos entre 1970 y 1990, la OPET se constituye en un contexto político nacional y estatal caracterizado por una mayor pluralidad política, gobiernos más controlados por la oposición y elecciones más confiables, lo cual le permite tener una receptividad institucional más favorable a sus demandas políticas. Por el otro lado, la concepción política de los evangélicos, cuyos pilares son el respeto a la constitución y la participación política pacífica, se desarrolla mejor en un entorno político-institucional democrático.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional

a) La historia en la clandestinidad

Los orígenes del EZLN se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una minúscula organización clandestina que se formó a finales de los años sesenta en el norte de México y estaba integrada, básicamente, por profesionistas y estudiantes de la clase media.[18] Inspirados en la revolución cubana, las FLN pretendían organizar una lucha guerrillera de liberación nacional que, tras el derrocamiento del gobierno, contribuyera a construir una sociedad socialista en México. Sin embargo, las FLN fueron prácticamente aniquiladas por las fuerzas "antisubversivas" del gobierno federal a principios de los años setenta. Un puñado de sobrevivientes logró, sin embargo, reorganizarse e instalarse en 1983 en diferentes regiones chiapanecas, en particular en los Altos, el Norte y la Selva Lacandona, persiguiendo los mismos objetivos. Para alcanzar sus metas revolucionarias, se abocaron a formar al EZLN y a una impresionante base social que apoyara y sostuviera al movimiento armado. Así, mediante un trabajo paciente de propaganda e infiltración de organizaciones campesinas y comunidades ejidales, el EZLN logró acumular fuerzas militares y políticas, nuevos simpatizantes y recursos suficientes para intentar el asalto del poder estatal con el levantamiento armado de 1994.[19]

---

18 Sobre la historia clandestina del EZLN, véase Carlos Tello Díaz (2000). *La rebelión de las Cañadas. Origen y ascenso del EZLN*. 1° reimpresión corregida y aumentada, México, Cal y Arena.

19 En torno a la formación, estructura, funciones y organización de las comunidades zapatista, consúltese mi trabajo (2005), "The 'Armed Community in Rebellion': Neo-Zapatismo in the Tojolab'al Cañadas, Chiapas (1988-96)", en *The Journal of Peasant Studies*, número especial sobre "Rural Chiapas ten years after the Zapatista Uprising", vol. 32, números 3 y 4, julio-octubre: 528-554.

Aunque el origen de la guerrilla zapatista es externo a la región y obedece a dinámicas exógenas, no obstante el surgimiento del neozapatismo debe verse a la luz de la crisis del movimiento indígena-campesino en Chiapas y a lo que algunos de sus actores consideraron como la clausura de la lucha política y legal. En efecto, el movimiento neozapatista marca una diferencia importante con el resto del movimiento campesino en Chiapas y del país, pues, por un lado declara que el camino político-institucional para satisfacer sus demandas y ver representados sus intereses para la integración social de los campesinos e indígenas estaría agotado; y, en consecuencia y por el otro lado, que la única vía posible para conseguir esos fines sería la lucha armada revolucionaria, que, bajo el liderazgo del EZLN, convocaría a los diferentes sectores sociales "explotados", tanto rurales (campesino e indígenas) como urbanos (obreros y clases medias), para apoyar su guerra de "liberación nacional".

El fracaso del levantamiento militar no significó el abandono del objetivo revolucionario, sino sólo su postergación estratégica. Por tanto, si la perspectiva nacional no podía realizarse de inmediato, habría que organizar, pensaba el EZLN, la autonomía territorial en sus zonas de influencia. Así, la lucha del EZLN se desmarcaba, de nuevo, de la del movimiento campesino nacional y chiapaneco, porque ya no se movilizaba *solamente* por el reparto de tierras o la producción y comercialización agropecuaria, sino por construir un poder autonómico, con una amplia base territorial, capaz de gobernarse por sí mismo y de generar alternativas de desarrollo social y productivo sin la intervención y los recursos del Estado. Bajo esta concepción política autonomista nacen los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno (JBG), sobre las cuales me referiré más adelante. Estos bastiones autonómicos serían la punta de lanza del movimiento revolucionario de liberación nacional en contra de la "dominación actual del Estado y el capital" y, a nivel global, del neoliberalismo, lo cual sería el resultado de la "organización de las rebeldías en la sociedad civil".

b) Institucionalización de la democracia y estrategia política del EZLN

La democratización del sistema político fue uno de los objetivos principales del EZLN; sin embargo, cuando ésta se dio, finalmente, en el año 2000 a través de la vía electoral y de manera pacífica con la elección de Vicente Fox Quesada como presidente de México y de un Congreso de la Unión plural, la dirigencia zapatista se desconcertó no sólo porque uno de sus objetivos se había cumplido sin su intervención revolucionaria, por lo que uno de los motivos originales de su lucha quedaba, así, satisfecho; sino, también, debido a que el nuevo gobierno mostró una clara voluntad de diálogo y disposición de negociación para resolver el conflicto chiapaneco. El gobierno federal tenía la legitimidad suficiente y el apoyo de la sociedad para alcanzar esta meta. Por su parte, con la organización de la "marcha del color de la tierra", los zapatistas mostraron no menos disposición para lograr un acuerdo que cerrara, para bien de todos, el capítulo chiapaneco.

Hay que recordar en qué contexto se dio, en 2001, este acercamiento entre el ejecutivo federal y el zapatismo. El diálogo entre el gobierno federal y el EZLN para la promoción de la paz quedó interrumpido desde septiembre 1996 tras la firma, en febrero de ese mismo año, de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar relativos a los derechos y cultura indígenas. Debido a pugnas intergubernamentales, estos acuerdos no fueron ratificados por el poder ejecutivo federal, lo que derivó en el abandono de los rebeldes de la mesa de negociación. Así, siguieron años de mutuo desconocimiento y tensión, cuyo punto culminante fue la matanza en Acteal, en diciembre de 1997, en un contexto caracterizado por el aumento de la presencia del Ejército Federal en las zonas de influencia zapatistas, el desmantelamiento de varios municipios autónomos rebeldes, la expulsión de activistas políticos extranjeros simpatizantes del zapatismo y la presión descalificadora a la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y a la labor mediadora del obispo Samuel Ruiz. A pesar de que el EZLN no tendría, desde entonces, más acercamiento oficial con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, tuvo la libertad de realizar diferentes actividades políticas importantes como la "marcha de los 1, 111" a la Ciudad de México y la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) en 1997, o la "consulta por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas" y el "segundo encuentro de la sociedad civil y el EZLN", ambos en 1999, sin temor a persecución militar o judicial, porque se hallaba amparado por la ley.

Como dijimos más arriba, el reinicio de las relaciones con el titular del ejecutivo federal se daría sólo hasta finales del año 2000, cuando el EZLN envía una carta pública al presidente Vicente Fox Quesada, el 2 de diciembre, en la que, entre otras cosas, menciona las condiciones que deberían cumplirse para reiniciar el diálogo de paz interrumpido en 1996.

Así, la "marcha del color de la tierra" que prepararon los zapatistas para presentar sus demandas en la Cámara de Diputados logró entusiasmar y convocar la simpatía de amplios sectores de la sociedad y de la clase política, porque se creía, entonces, que la pacificación de Chiapas "con justicia y dignidad" estaba cerca. Una vez que los zapatistas pudieron acceder a la tribuna del Congreso de la Unión para explicar y abogar por sus demandas, decidieron retornar inmediatamente a Chiapas y, desde allí, observar y esperar el desenlace legislativo de la deliberación y decisión. El Congreso decidió aprobar, con modificaciones, la llamada "ley Cocopa",[20] lo cual fue interpretado por los zapatistas, sin embargo, como "otra traición y un engaño más" del gobierno hacia los pueblos indígenas.

De tal suerte, desconociendo la reforma constitucional sobre cultura y derechos indígenas –que finalmente entró en vigor en 2002–, el EZLN interrumpió el diálogo de paz, ya que consideró que el gobierno federal no dio satisfacción cabal

20 El nombre hace referencia a la comisión plural de senadores y diputados de la República (*Comisión de Concordia y Pacificación*) que fungieron como intermediadores entre los rebeldes y el gobierno federal.

a las "señales" exigidas para sentarse, de nuevo, a la mesa de negociación. En consecuencia, se recluyó en sus bastiones chiapanecos para preparar la autonomía de facto con la creación de las JBG en el año 2003.

La reacción del gobierno federal ante el fiasco de su política de diálogo y pacificación en Chiapas no consistió en una campaña político-militar para presionar a los zapatistas, sino en una actitud de permisividad hacia los rebeldes sin involucrarse en debates públicos con la comandancia del EZLN. Con ello, evitó darle oportunidad al grupo armado de continuar el conflicto a través de la polémica mediática y, así, mantener o acrecentar su presencia y fuerza a nivel nacional e internacional. Por tanto, sin acciones militares de por medio y ante el silencio del líder y vocero del movimiento zapatista, el subcomandante Marcos, el conflicto tomó una mera dimensión regional. Esto permitió al gobierno que se realizaran, sin mayores aspavientos publicitarios, diálogos y negociaciones directas y al "ras de la tierra" con las comunidades rebeldes inconformes, por medio del Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Luis H. Álvarez, y sin la intervención de la dirigencia rebelde. Asistiendo solamente a las comunidades que lo habían invitado previamente, el comisionado atendió las demandas particulares de los inconformes y demás habitantes en las "zonas de conflicto", cuyas características generales eran que estaban relacionadas con el bienestar, equipamiento y desarrollo comunitario. Asimismo, los litigios agrarios en torno a la tenencia de la tierra empezaron a regularizarse, también a ras de tierra, con el trabajo de la delegación en Chiapas de la Reforma Agraria, dando seguridad y certidumbre a las comunidades que buscaban el diálogo, incluyendo, por supuesto, a las de las bases de apoyo del EZLN.

En el marco de una gran inversión pública en la región, una de las consecuencias importantes de esta estrategia política ha sido, sin duda, el abandono de cada vez más simpatizantes o bases de apoyo del movimiento zapatista.

c) Las Juntas de Buen Gobierno

En este contexto de políticas de "bajo perfil" hacia el Chiapas zapatista, los gobiernos federal y estatal toleraron la iniciativa zapatista de crear sus propios gobiernos autónomos con el fin de no provocar al EZLN y darle una "causa de guerra" que podría desestabilizar la región.

La creación de las juntas supone un esfuerzo por reorganizar el movimiento zapatista en una situación de crisis y desarticulación del neozapatismo.[21] Esta reorganización implica dos cosas:

---

21 Sobre la organización, funcionamiento y problemas de las JBG, véase mi trabajo (2006), "¿Autonomía o hegemonía? Un análisis de la Junta de Buen Gobierno *Hacia la Esperanza* en las Cañadas Tojolabales de la Selva Lacandona". *El Cotidiano*, año 21, mayo-junio: 52-61. En cambio, en torno a lo que denomino la "crisis" del zapatismo en la región tojolabal, consúltese mi artículo (2005): "Des communautés divisées: l'expérience zapatiste dans les vallées tojolabales". *Communisme*, París, números 83 y 84: 163-184.

– una estrategia política interna para cohesionar y coordinar al zapatismo regional bajo una autoridad civil común supra-comunitaria en vista a mantener la "resistencia" de una manera más disciplinada;

– y la redefinición de las relaciones del zapatismo con comunidades, organizaciones campesinas y políticas y el gobierno del estado.

Con respecto al primer punto, con la construcción de las JBG se espera revertir los efectos más "desgastantes" de la resistencia como la falta de recursos y de programas de desarrollo comunitario, cuya ausencia e insuficiencia, según sea el caso, ha generado procesos de tensión al interior del zapatismo y de deserción. En este sentido, las juntas fungen como instancias de coordinación y administración por arriba de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las comunidades, con el fin de revertir las diferencias de beneficio y desarrollo entre las comunidades armadas rebeldes y acabar con las comunidades zapatistas de primera y segunda clase.

Este proceso de racionalización administrativa requiere, por tanto, generar reglas comunes de operación de los Consejos Autónomos de los MAREZ para reducir tanto la discrecionalidad y conflictividad en sus quehaceres gubernamentales y de los líderes zapatistas locales y regionales, como la corrupción y el favoritismo, dándole a las bases de apoyo del EZLN la oportunidad de acceder a una instancia superior de queja y apelación frente a las desviaciones y abusos de las autoridades locales y del Consejo Autónomo. Lo anterior significa un mayor control de la JBG sobre éstos y, en consecuencia, una centralización de poder en las JBG.

En cuanto al segundo punto en cuestión, la redefinición de las relaciones del zapatismo mediante las juntas implica una lucha hegemónica con los demás actores, grupos e instituciones en torno a la capacidad del zapatismo de ordenar el conjunto de la vida social en "sus" territorios. En efecto, en su lucha por la hegemonía, las juntas procuran operar, entonces, no sólo como un gobierno, sino, además, *como si* fuesen un Estado que busca construir su autonomía al interior de lo que reclama como su "territorio". Al menos en el municipio de Las Margaritas, en donde la JBG tiene sede en La Realidad-Trinidad, se ha logrado cierta distensión entre los zapatistas y los demás actores colectivos de la región. No obstante, ha habido una serie de conflictos, algunos de ellos con consecuencias mortales, entre los zapatistas y otros grupos políticos, especialmente la CIOAC, porque los primeros intentan imponer su autoridad a todo habitante de la región, y los segundos desconocen dicha legitimidad.

d) "La otra campaña"

La lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas y el proyecto de la JBG redujeron, paradójicamente, el ámbito de influencia y operación del movimiento zapatista a lo *local* e *indígena* justo en una situación en la que se institucionalizaba la democracia, se enfriaba además el conflicto entre los gobiernos federal y estatales y el EZLN y, por último, disminuía el apoyo y la solidaridad nacionales e

internacionales al movimiento zapatista. Así, *nolen volens*, el neozapatismo se alejaba de su objetivo original y principalísimo: la liberación nacional. La estrategia gubernamental de tolerancia e indiferencia hacia el zapatismo daba resultado en términos de crear la apariencia de que al fin se había logrado la paz en Chiapas y que a los zapatistas se les podía ver como una organización política más que actuaba en el marco de la ley, por lo que no requerían un tratamiento especial.

La "desaparición" mediática de los zapatistas pareció corresponder con su creciente desarticulación en sus "zonas de influencia". Por eso, ante la irrelevancia política del movimiento zapatista, éste propuso, en el verano de 2005, la iniciativa de "la otra campaña" con el fin de reposicionarse políticamente aprovechando el marco de las campañas políticas por la presidencia de la república. El 1° de julio de ese año, unos días después de haber declarado "alerta roja" a sus tropas y bases de apoyo por razones nunca aclaradas, el EZLN publica la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en donde anuncia la nueva estrategia política de los rebeldes, que más tarde se conocería como "la otra campaña". En este documento se refrenda la lucha política pacífica, la cual se caracterizará por el estrechamiento de relaciones y alianzas con organizaciones de izquierda, no partidistas, anticapitalistas y antineoliberales. En los encuentros entre la delegación zapatista de "la otra campaña" y los suscriptores de la Sexta Declaración se empezaría a formular un "programa de lucha nacional".

La "otra campaña" puede verse a la luz de la crisis del zapatismo en sus bastiones chiapanecos. Así, para darle vida al zapatismo *más allá de la selva*, se ha buscado una salida espectacular de Chiapas con el peregrinaje por todo el país de la delegación zapatista de "la otra campaña" para "demostrar" la fuerza y vigencia de la lucha zapatista, calculando que los medios de masas se volcarían hacia ellos y los enlazarían mediáticamente con la ciudadanía, como hicieron durante la "marcha del color de la tierra". Pero lo que la delegación zapatista encontró antes de los disturbios populares y la represión policíaca en San Salvador Atenco, en el Estado de México, a principios de mayo de 2006, no fue sino indiferencia de la opinión pública tras los primeros eventos de esta nueva iniciativa política.

Habría que destacar que la "otra campaña" se realiza sin los indígenas zapatistas y sin sustento a un discurso étnico. Paradójicamente, se busca demostrar la fuerza del zapatismo pero sin la participación de los indígenas. Alejándose del discurso y las luchas indianistas, el EZLN ha empezado a apelar a la solidaridad de otros grupúsculos políticos "de izquierda anticapitalista" con la esperanza de hacer del zapatismo, mediante una red de alianzas, un movimiento nacional –un movimiento que ya no esté atado a la geografía regional chiapaneca ni a la membresía indígena.

Como en el caso de la UES, la CIOAC y la OPET, en el del EZLN vale también la expresión "origen es destino". En efecto, el EZLN no ha abandonado el proyecto de la lucha revolucionaria socialista, sino que sólo ha modificado las estrategias para alcanzarlo, de acuerdo a diferentes y cambiantes contextos políticos: del alzamiento armado, a los diálogos por la paz, pasando por la lucha por los derechos y

la cultura indígenas hasta la formación de autonomías territoriales de facto y, por último, el relanzamiento de la lucha por la liberación nacional mediante la construcción de una coalición nacional antiestatal y anticapitalista.

Ahora bien, de 1994 a 2001, el apoyo popular a las causas zapatistas por parte de amplios segmentos de la población ha estado condicionado a la búsqueda de la paz, a la satisfacción de las demandas indígenas de reconocimiento cultural y a la promoción de la justicia social para los indios de México. Por esta vinculación histórica entre el discurso indianista y la solidaridad con el zapatismo, "la otra campaña" ha provocado más bien escepticismo y distanciamiento entre sus potenciales seguidores, porque en ella ha predominado el discurso y los objetivos nacional-revolucionarios que compartirían únicamente grupos muy minúsculos y radicales. No es casualidad, entonces, que el subcomandante Marcos haya declarado que, para cambiar el orden mundial social, político y económico, "se necesita un hombre nuevo" –eso sin mencionar la demanda de "derrocar" al gobierno, aunque sea "de manera pacífica".

En este sentido, es perfectamente lógico que la delegación zapatista de "la otra campaña" haya aprovechado los sangrientos sucesos en el Estado de México para buscar "reposicionarse" ante el futuro nuevo gobierno federal y la clase política y, así, preparar las condiciones de presión y negociación y el terreno de sus futuras acciones e iniciativas políticas.

Reflexiones finales

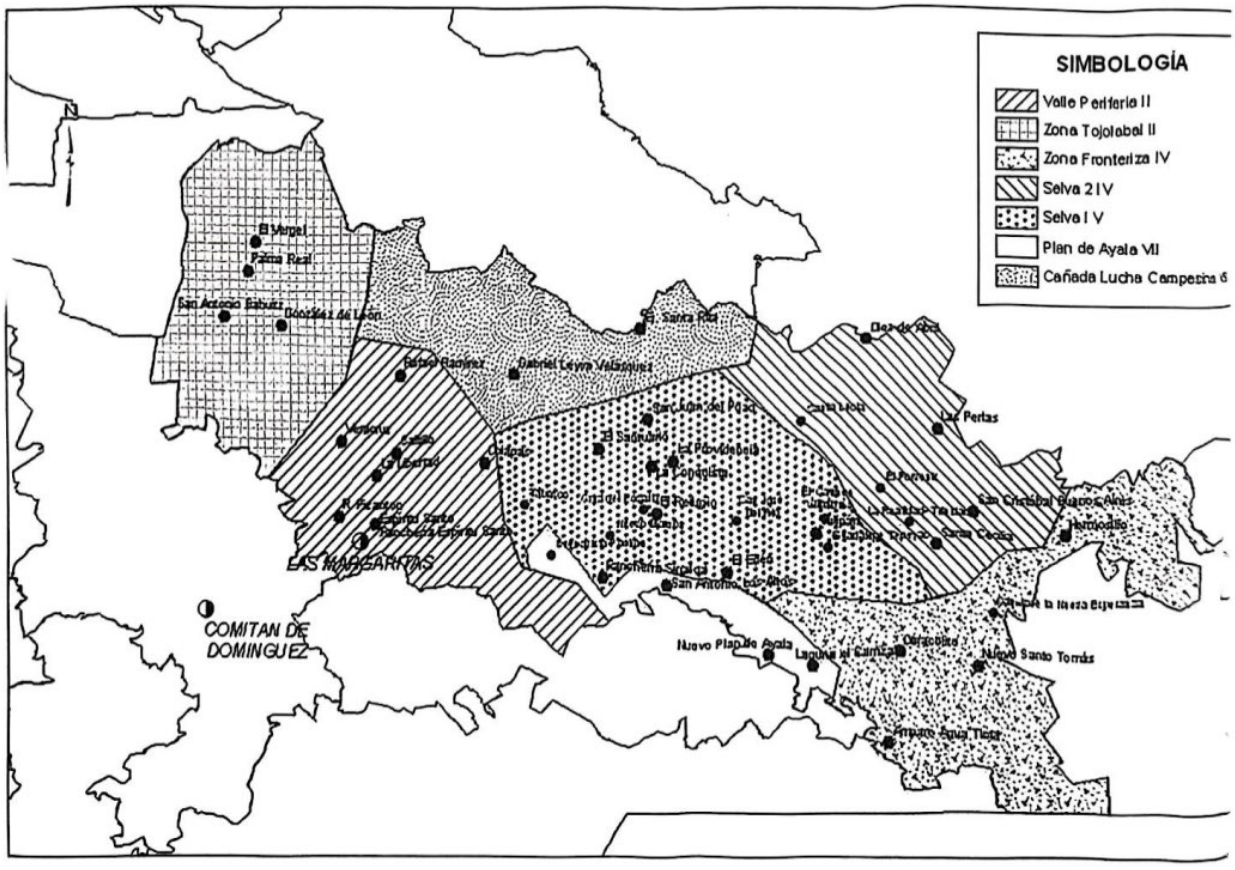
He partido de la tesis de que los actores colectivos indígena-campesinos independientes en Chiapas se han encontrado, en los últimos treinta años, en una misma situación caracterizada por la crisis del modelo económico del campo y la crisis del sistema político mexicano, así como por la democratización, a más tardar en el año 2000, de éste último. En efecto, todos los actores colectivos aquí analizados se constituyen como tales en el horizonte de una historia social compartida, cuya etapa contemporánea inicia con el fin de la gran propiedad privada a mediados de la década de los treinta del siglo pasado. Además de compartir orígenes étnicos, también han tenido condiciones socioeconómicas similares, lo cual ha contribuido a generar lazos de solidaridad y cooperación para la organización y movilización políticas. Su formación como actores colectivos se dio en el marco de un sistema político autoritario y excluyente, lo cual los obligó a definirse por su independencia política. Salvo la OPET, la UES, la CIOAC y el EZLN orientaron su lucha política como negación y superación revolucionaria del orden social y político que había mantenido a los indígenas de la región en una situación subordinada con escasas probabilidades de desarrollo social.

No obstante, a pesar de compartir una situación estructural y estar expuestos a procesos sociales, políticos y económicos comunes, cada uno de ellos ha ofrecido respuestas políticas diversas a circunstancias complejas. La diferencia sustancial

de sus estrategias políticas es entendible a la luz de la historia particular de cada uno de ellos, así como de los marcos cognitivos propios, su inserción en diferentes redes sociales, organizacionales e institucionales y el reconocimiento de la oportunidad política en un entorno político-institucional cambiante y abierto a la intervención de los actores.

Por todo lo apuntado a lo largo de este escrito, lo étnico, como factor de explicación del fenómeno de la constitución y movilización de los actores colectivos, resulta un elemento más a considerar, pero, en ningún caso, *la variable clave*, por lo que siempre habrá que ponderarse en su importancia explicativa en relación a otras dimensiones analíticas. De hecho, sólo hasta después del levantamiento armado de 1994 todos estos actores empezaron a considerarse como "indígenas", pero más bien en términos "estratégicos" en el sentido que exponen José Luis Escalona y Alejandro Agudo en sus respectivas contribuciones a este volumen. Y, como vimos en el caso zapatista en relación a "la otra campaña", es muy probable que en el futuro próximo estos actores dejen de lado, al menos de manera temporal, la "identidad étnica" como uno más de los elementos de su repertorio activo de protestas para continuar sus luchas sociales y políticas por medio de otros contenidos y lenguajes.

Mapa: micro-regiones del municipio de Las Margaritas



Fuente: elaborado en el Departamento de Sistemas de Información Geográfica, El Colegio de México con base en datos de Estrada Saavedra, 2006